



Asamblea General

Distr. general
24 de febrero de 2017
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
27º período de sesiones
1 a 12 de mayo de 2017

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

GE.17-01935 (S) 210317 230317



* 1 7 0 1 9 3 5 *

Se ruega reciclar



Siglas y abreviaturas

DC	dependencias de la Corona ¹
DC2014	Documento básico común de 2014 del Reino Unido, los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona ²
EPU	examen periódico universal
INDH	instituciones nacionales de derechos humanos (en el Reino Unido son las siguientes: Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte; Comisión de Derechos Humanos de Escocia)
OIT	Organización Internacional del Trabajo
SIA	organismos de seguridad e inteligencia (Servicio de Seguridad, Servicio Secreto de Inteligencia, Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido)
TBU	territorios británicos de ultramar ³
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa)
UE	Unión Europea

I. Introducción

1. El Reino Unido acoge con satisfacción el tercer examen periódico universal (EPU) de su historial de derechos humanos. El EPU es un proceso constructivo que permite a los Estados aprender y ayudarse mutuamente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Reino Unido sigue manteniendo su pleno compromiso con el proceso del EPU y la promoción de los derechos humanos a nivel internacional.
2. El 23 de junio de 2016, el pueblo del Reino Unido votó en favor de la salida del país de la Unión Europea (UE). No obstante, el Reino Unido seguirá siendo un buen amigo, aliado y socio comercial de sus vecinos europeos; una nación abierta al exterior y a los negocios, comprometida con la paz y la seguridad y destacada defensora del sistema internacional basado en normas. Recordando la celebración en 2015 del 800° aniversario del sellado de la Carta Magna, el Reino Unido se muestra decidido a mantener su destacado papel en la escena mundial en lo referente a los derechos humanos, y sigue cumpliendo con sus obligaciones internacionales en esa esfera. Asimismo, el Reino Unido adoptará medidas para hacer frente a toda conculcación de esos derechos. Tal como indicó claramente la Primera Ministra Theresa May en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2016, eso incluye trabajar con las Naciones Unidas para adaptar una respuesta mundial ante la migración en masa y reducir la amenaza del terrorismo internacional, erradicar las formas contemporáneas de esclavitud, defender los derechos de las mujeres y las niñas y repudiar la violencia sexual en los conflictos.
3. El Gobierno del Reino Unido sigue decidido a reformar su marco nacional de derechos humanos. Seguiremos examinando la Carta de Derechos cuando conozcamos las condiciones de nuestra salida de la UE y hayamos mantenido todas las consultas necesarias sobre nuestras propuestas teniendo pleno conocimiento del nuevo panorama constitucional que se creará.

II. Metodología y proceso de consulta

4. El presente informe complementa los informes periódicos⁴ presentados por el Reino Unido desde 2012, y ofrece una visión general de las principales novedades acontecidas desde el examen periódico universal de 2012 y el informe de mitad de período de 2014⁵. El informe incluye contribuciones de los ministerios del Gobierno del Reino Unido, las administraciones autónomas, los territorios británicos de ultramar (TBU) (por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth) y las dependencias de la Corona (DC). En un anexo aparte se indica la posición actual del Reino Unido con respecto a las recomendaciones del EPU de 2012, con una mención simplificada de “cuenta con el apoyo” o “se toma nota” respecto de cada una de ellas.
5. Para la preparación de este informe, el Gobierno del Reino Unido y las administraciones autónomas consultaron con varias organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos (INDH). El proceso de consulta se basó en gran medida en los siguientes actos celebrados con partes interesadas: en Londres, el 6 de octubre de 2016, organizado por el Gobierno del Reino Unido; en Cardiff, el 21 de octubre de 2016, organizado por el Gobierno de Gales; en Glasgow, el 27 de octubre de 2016, organizado por el Gobierno de Escocia. El Ejecutivo de Irlanda del Norte celebró una serie de encuentros bilaterales con diversas organizaciones en octubre de 2016. Los temas abordados en el presente informe reflejan en buena parte los resultados de ese proceso de colaboración con los interesados.

III. Marco general para la protección y promoción de los derechos humanos y para combatir la discriminación

A. Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

6. El Reino Unido sigue siendo parte en siete⁶ tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. También sigue cumpliendo sus obligaciones en virtud de los Protocolos Facultativos que ha ratificado⁷. Además, el Gobierno del Reino Unido está revisando sus reservas a los tratados de las Naciones Unidas respecto de los TBU. Las reservas formuladas con respecto al Reino Unido y las DC se examinarán en el próximo proceso de presentación de informes periódicos con arreglo a cada uno de los tratados⁸.

7. El Gobierno del Reino Unido ha examinado su postura con respecto a la aceptación del derecho de presentación de demandas individuales ante las Naciones Unidas más allá del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad⁹, y ha llegado a la conclusión de que siguen sin estar claras las ventajas del procedimiento de comunicación. El proceso de las Naciones Unidas no es un mecanismo de apelación, no puede revocar las decisiones de los tribunales nacionales y tampoco puede dar lugar a un dictamen ejecutable de indemnización para el solicitante. El Reino Unido es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que cualquier persona en el país tiene ya acceso al procedimiento de presentación de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)¹⁰. Según el análisis estadístico de 2015 del TEDH, a finales de 2015 había 64.834 demandas en examen: solo 256 (aproximadamente el 0,4%) iban dirigidas contra el Reino Unido. A finales de 2015, el Reino Unido era responsable de tan solo 19 (el 0,2%) de un total de 10.652 sentencias del TEDH pendientes ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

8. El Gobierno del Reino Unido ha examinado su postura con respecto a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares¹¹. Con respecto a la primera, el Gobierno del Reino Unido considera que el actual marco nacional ya impide las detenciones arbitrarias, prohíbe la tortura y los tratos degradantes y hace que los organismos de seguridad e inteligencia (SIA, por sus siglas en inglés) tengan que rendir cuentas. Con respecto a la segunda, el Gobierno del Reino Unido considera que los derechos de los trabajadores migratorios ya están protegidos en las leyes nacionales, como la Ley de Derechos Humanos de 1998 y la Ley de Igualdad de 2010. Por consiguiente, el Gobierno del Reino Unido duda de las ventajas de ratificar esas dos convenciones.

9. Si bien deben considerarse por separado las disposiciones específicas de cada tratado, el Gobierno del Reino Unido sigue opinando que las obligaciones internacionales de derechos humanos dimanantes de los tratados de las Naciones Unidas que el país ha ratificado son principalmente de tipo territorial y no tienen efectos extraterritoriales¹². Con respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno del Reino Unido ha declarado públicamente que, antes de emprender operaciones militares de envergadura en el extranjero, tiene la intención de suspender la aplicación de dicho Convenio cuando proceda según las circunstancias específicas de la operación en cuestión. Toda suspensión tendrá que ser justificada y solo podrá afectar a determinados artículos del Convenio. Independientemente de que se aplique o no ese tipo de suspensión, las Fuerzas Armadas del Reino Unido seguirán estando sujetas en todo momento al estado de derecho, lo que incluye la legislación penal del Reino Unido y, cuando proceda, el derecho de los conflictos armados¹³. Por consiguiente, en cualquier parte del mundo en que se alegue que un miembro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido ha cometido un delito en acto de servicio, se llevará a cabo una investigación que podrá dar lugar a una acción judicial ante un tribunal militar especial (service court) con arreglo a la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006. En 2013, el Tribunal Superior confirmó que el Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq, creado para prestar apoyo a las investigaciones dirigidas por la policía militar, cumplía el requisito de independencia que exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las

estadísticas sobre el número de casos atendidos por dicho Grupo se publican periódicamente en el portal del Gobierno del Reino Unido GOV.UK; el Grupo espera concluir su labor para 2019. La Operación Northmoor es una investigación aparte dirigida por la Real Policía Militar sobre denuncias contra las Fuerzas Armadas del Reino Unido formuladas en el Afganistán; hasta la fecha¹⁴ se han recibido 646 denuncias, de las cuales se han archivado o se ha recomendado que se archiven 146¹⁵. Por otro lado, se ha nombrado a un juez jubilado del Tribunal Superior para que lleve a cabo una serie de investigaciones (que se han denominado Iraq Fatalities Investigations) sobre las circunstancias de seis muertes, tras lo cual seguirán nuevos casos; cuatro de los casos investigados han concluido y se han publicado informes sobre las conclusiones.

10. El Reino Unido firmó el Convenio de Estambul en 2012¹⁶. Las nuevas disposiciones sobre la competencia extraterritorial exigen legislación primaria, cuya promulgación y aplicación afectarán al calendario de ratificación del Convenio.

B. Marco jurídico para la protección y promoción de los derechos humanos y para combatir la discriminación a nivel nacional

11. El marco nacional del Reino Unido para la protección y promoción de los derechos humanos y para combatir la discriminación¹⁷ sigue siendo el que se describe en el documento básico común del país de 2014 (DC2014)¹⁸, por lo que está inspirado en gran medida en la Ley de Derechos Humanos de 1998 y en la Ley de Igualdad de 2010.

12. Una evaluación retrospectiva publicada en 2015 sobre la Ley de Igualdad de 2010 mostraba que con esta se había logrado aumentar considerablemente la protección frente a la discriminación para todos los grupos protegidos. Actualmente no hay planes para empezar a aplicar las disposiciones relativas a las desigualdades socioeconómicas que figuran en la Parte 1 de la Ley. El Gobierno del Reino Unido tiene previsto realizar una consulta pública sobre la manera más eficaz de prohibir por ley la discriminación basada en la casta¹⁹.

13. En Irlanda del Norte, el Acuerdo de Stormont de diciembre de 2014 dispuso, entre otras medidas, la creación de una Dependencia de Investigaciones Históricas independiente para impulsar la investigación de las muertes relacionadas con el conflicto que seguían pendientes de esclarecimiento²⁰. El Gobierno del Reino Unido ha indicado que destinará 150 millones de libras esterlinas más para que las nuevas instituciones puedan abordar los problemas del pasado de forma equilibrada y proporcionada. A raíz del acuerdo “Fresh Start” (Nuevo Comienzo) de noviembre de 2015 se alcanzaron puntos de acuerdo en Irlanda del Norte con respecto a las instituciones encargadas de hacer frente al legado del conflicto. El Gobierno del Reino Unido seguirá trabajando con los partidos norirlandeses, los grupos de víctimas y otros interesados a fin de encontrar una solución que permita crear los órganos previstos en el Acuerdo de Stormont. El Gobierno del Reino Unido también es consciente de la importancia de los derechos humanos en el Acuerdo de Belfast de abril de 1998 y sigue mostrando su compromiso con ese Acuerdo. El Gobierno del Reino Unido está dispuesto a considerar propuestas sobre una Carta de Derechos específica para Irlanda del Norte si se logra alcanzar un consenso suficiente.

14. El programa de gobierno para 2016/17 del Gobierno de Escocia incluye el compromiso de integrar los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Marco Nacional de Desempeño de Escocia. Como parte de las obligaciones específicas de en materia de igualdad, los ministros escoceses tienen el deber de publicar propuestas para ayudar a las autoridades públicas de Escocia a lograr cumplir mejor el deber del sector público de velar por la igualdad, así como de informar de los avances conseguidos en ese terreno. El Gobierno de Escocia creó el Proyecto Nacional de Mejora de la Igualdad en Escocia para ejecutar las propuestas de los ministros escoceses. Asimismo, el Gobierno de Escocia se ha comprometido a imponer en 2017 una obligación de carácter socioeconómico a los organismos públicos.

IV. Logros, mejores prácticas, desafíos y limitaciones

A. Derechos civiles y políticos

Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas²¹

15. El Gobierno del Reino Unido ha introducido los delitos específicos de hostigamiento criminal, matrimonio forzado, omisión de protección frente a la mutilación genital femenina y pornografía por venganza, así como un nuevo delito de violencia doméstica, para incluir comportamientos coercitivos o controladores en una relación íntima o familiar. El Gobierno del Reino Unido también ha implantado las órdenes de protección por violencia doméstica y el programa para la publicación de información sobre personas con antecedentes de violencia doméstica a nivel nacional, ha introducido las órdenes de protección contra la mutilación genital femenina y el deber de notificación obligatoria de cualquier mutilación genital femenina, y ha intensificado las medidas para controlar a quienes han cometido delitos sexuales o se considera que podrían llegar a infligir daños de índole sexual. Se ofrece asistencia jurídica gratuita para asuntos civiles a las personas que pidan protección frente a la violencia doméstica, por ejemplo para solicitar órdenes de alejamiento, de atribución del uso de la vivienda, de protección contra el matrimonio forzado o de protección contra la mutilación genital femenina. También se ofrece asistencia jurídica gratuita para asuntos civiles en cuestiones de derecho de familia del ámbito privado, como la tramitación de órdenes sobre la custodia de los hijos en casos de separación, cuando hay pruebas objetivas de violencia doméstica o maltrato infantil.

16. El Ejecutivo de Irlanda del Norte publicó en marzo de 2016 una estrategia a siete años, “Stopping Domestic and Sexual Violence and Abuse in Northern Ireland” (Acabemos con el abuso y la violencia doméstica y sexual en Irlanda del Norte). La Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina de 2003 prohíbe esa práctica. La Ley de Delitos Graves de 2015 prevé órdenes de protección contra la mutilación genital femenina. Los profesionales de los servicios sociales y de la salud se rigen por las directrices interinstitucionales sobre prácticas en materia de mutilación genital femenina publicadas en julio de 2014. El programa “Supporting People” (Apoyo a las Personas), que ofrece 13 refugios en Irlanda del Norte, cuenta con un presupuesto anual de más de 4,6 millones de libras esterlinas. Hay una línea de asistencia telefónica, operativa las 24 horas del día, para víctimas de violencia doméstica y sexual.

17. Durante el presente ejercicio parlamentario el Gobierno de Escocia está preparando leyes para la tipificación de un delito específico de violencia doméstica, aparte de aplicar la estrategia “Equally Safe” (Igualmente Seguras) para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Con la Ley de Matrimonios Forzados, etc. (Protección y Jurisdicción) de Escocia de 2011 se introdujo en Escocia una orden de protección civil contra el matrimonio forzado, cuya infracción constituye un delito penal, mientras que la Ley de Conductas Antisociales, Delincuencia y Policía de 2014 establece que es delito que se obligue a una persona a contraer matrimonio. En febrero de 2016 se publicó el Plan de Acción Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Mutilación Genital Femenina de Escocia.

18. En Gales, la Ley de Violencia contra las Mujeres, Violencia Doméstica y Violencia Sexual (Gales) de 2015 tiene por objeto centrar la atención del sector público en la prevención de esos delitos. El Gobierno de Gales ha creado el Marco Nacional de Capacitación sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en Gales.

Lucha contra la trata de personas y la esclavitud²²

19. Para combatir las formas contemporáneas de esclavitud, el Gobierno del Reino Unido ha introducido la Ley sobre la Esclavitud Moderna de 2015, que incluye una pena máxima de cadena perpetua para los autores y mayor apoyo y protección a las víctimas. La Ley incluye disposiciones sobre la transparencia en las cadenas de suministro de las empresas y la figura del Comisionado Independiente de Lucha contra la Esclavitud. La Estrategia de 2014 del Reino Unido contra la Esclavitud Moderna define un enfoque amplio para combatir las formas contemporáneas de esclavitud. En julio de 2016, la

Primera Ministra anunció la creación de un nuevo equipo de tareas para impulsar la lucha contra la esclavitud y prometió 33,5 millones de libras esterlinas de financiación para el desarrollo con miras a prevenir la esclavitud, que incluían un Fondo de Innovación de 11 millones de libras esterlinas destinado a apoyar nuevos métodos para combatir la esclavitud y un Fondo de Protección contra la Trata Infantil de 3 millones de libras esterlinas. El Gobierno del Reino Unido dedicará además 8,5 millones de libras esterlinas a modificar la respuesta de la policía ante este complejo delito, que presenta múltiples facetas. El Gobierno del Reino Unido defendió con éxito que se fijara el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 de las Naciones Unidas para poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, y ratificó el Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

20. En Irlanda del Norte, el Departamento de Justicia tiene la obligación legal de prestar apoyo y asistencia, a través del Mecanismo Nacional de Remisión, a las posibles víctimas de la trata de personas, incluidas todas las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud. La Ley de Justicia Penal y Apoyo a las Víctimas en Casos de Trata y Explotación de Personas (Irlanda del Norte) de 2015 refuerza la protección y el apoyo a las víctimas de la trata de personas y la esclavitud. El artículo 12 de la Ley establece que el Departamento de Justicia debe presentar una estrategia anual sobre la trata de personas y la esclavitud contemporánea. Todos los niños y jóvenes de los que se sospeche que han sido víctimas de trata deben ser considerados por el Consorcio de Salud y Atención Social niños necesitados de cuidado y protección en virtud del artículo 18 del Decreto sobre la Infancia (Irlanda del Norte) de 1995.

21. En Escocia, la Ley contra la Trata y la Explotación de Personas (Escocia) de 2015 consolida y fortalece la legislación penal contra la trata y la explotación de personas, introduce una pena máxima de cadena perpetua para los autores y refuerza el apoyo y la protección a las víctimas, tanto adultos como niños. Estos últimos reciben el apoyo del sistema de protección de la infancia y, si cumplen determinados requisitos, reciben además apoyo de un tutor independiente especializado en casos de trata de niños. La Ley de Víctimas y Testigos (Escocia) de 2014 obliga a la Policía de Escocia a remitir a las víctimas de delitos al Código de Víctimas de Escocia, que contiene información sobre indemnizaciones y está disponible en varios idiomas. El acceso a asistencia jurídica gratuita para algunos temas relacionados con la trata de personas no está supeditado a un reconocimiento oficial de la condición de víctima.

22. En Gales, la Ley de Violencia contra las Mujeres, Violencia Doméstica y Violencia Sexual (Gales) de 2015 incluye disposiciones para combatir la violencia por cuestiones de honor, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina. El Marco Nacional de Capacitación sobre la violencia contra las mujeres y las niñas elaborado por el Gobierno de Gales estableció criterios de capacitación sobre estas cuestiones en la administración pública galesa. El Grupo Directivo de Lucha contra la Esclavitud de Gales proporciona orientaciones estratégicas para la lucha contra la esclavitud en Gales.

Lucha contra la discriminación y los delitos motivados por prejuicios²³

23. El Gobierno del Reino Unido puso en marcha en 2016 un nuevo Plan de Acción contra los Delitos Motivados por Prejuicios. Entre otras iniciativas, este Plan incluye medidas en materia de educación, lucha contra los delitos motivados por prejuicios en las comunidades, mayor información y denuncia, mejora de los servicios a víctimas y testigos y mayor comprensión de los delitos motivados por prejuicios. A partir de abril de 2017, todas las fuerzas de policía tendrán que facilitar datos desglosados de los delitos motivados por prejuicios religiosos. Las estadísticas indican un aumento de los delitos agravados por motivos religiosos y raciales en julio de 2016 con respecto al año anterior. No obstante, esto no debe interpretarse como un incremento en términos absolutos de los delitos motivados por prejuicios; es más probable que el aumento se deba a la combinación de varios factores, como por ejemplo un control policial más proactivo, un aumento de las denuncias de transeúntes y una mayor conciencia de la naturaleza de los delitos motivados por prejuicios debido al amplio tratamiento informativo que se les está dando en los medios de comunicación. Se ha constatado que algunos delitos supuestamente motivados por prejuicios obedecían en realidad a otros motivos.

24. El Ejecutivo de Irlanda del Norte sigue impulsando medidas para combatir los delitos motivados por prejuicios en el marco de la Estrategia de Igualdad Racial y los aspectos pertinentes de la estrategia “Together: Building United Communities” (Juntos: Construyendo Comunidades Unidas). Esta labor forma parte de la respuesta ante problemas sociales más amplios que en última instancia se manifiestan a través del sectarismo y los delitos motivados por prejuicios racistas. La Estrategia de Seguridad Comunitaria 2012-2017 del Departamento de Justicia incluye el compromiso de luchar contra todas las formas de delitos motivados por prejuicios mediante la prevención, la sensibilización, la educación y el apoyo a las víctimas y las comunidades. El Departamento de Justicia también preside el grupo interinstitucional de ejecución de medidas para combatir los delitos basados en prejuicios “Hate Crime Delivery”.

25. El Gobierno de Escocia ha invertido más de 100 millones de libras esterlinas desde 2012 para promover la igualdad y combatir la discriminación, y sigue trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones asociadas para promover la visión de “Una Escocia”. Cada año, junto con el proyecto de presupuesto, el Gobierno de Escocia publica una declaración sobre su impacto en la igualdad. El Gobierno de Escocia creó un grupo consultivo independiente sobre los delitos motivados por el odio y los prejuicios y sobre la cohesión de la comunidad, que publicó su informe el 23 de septiembre de 2016. El Gobierno de Escocia ha aceptado las recomendaciones de ese grupo y además está trabajando para mejorar la recopilación de datos con objeto de comprender mejor la magnitud y gravedad de los delitos motivados por prejuicios.

26. En Gales se puso en marcha, en mayo de 2014, el Marco de Acción para Hacer Frente a los Delitos e Incidentes Motivados por Prejuicios, en el que se expone el compromiso del Gobierno de Gales de hacer frente a la hostilidad y los prejuicios. El Marco incluye tres objetivos, relacionados con la prevención, el apoyo a las víctimas y la mejora de la respuesta interinstitucional. Desde 2014, el Gobierno de Gales financia a la organización Victim Support Cymru (Apoyo a las Víctimas en el País de Gales) para que dirija el Centro Nacional de Apoyo y Denuncias ante Delitos Motivados por Prejuicios.

Protección de los derechos humanos y lucha contra el terrorismo

Respeto de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo²⁴

27. El Gobierno del Reino Unido considera que las medidas de lucha contra el terrorismo que adopta cumplen con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el país. La Ley de Derechos Humanos de 1998 exige que, en la medida de lo posible, todas las leyes se interpreten y se apliquen de manera compatible con los derechos reconocidos en el Convenio. Además, es ilegal que una autoridad pública actúe de manera incompatible con esos derechos, salvo cuando exista la obligación de hacerlo en virtud de una ley del Parlamento del Reino Unido o cuando se apliquen leyes que no puedan interpretarse de manera compatible con los derechos consagrados en el Convenio. Las leyes de lucha contra el terrorismo también son examinadas periódicamente por el Revisor Independiente de la Legislación en materia de Terrorismo. Las directrices reglamentarias para la policía indican claramente que la raza, la religión o las creencias no pueden considerarse motivos razonables para sospechar que una persona es susceptible de ser terrorista, y nunca deben considerarse una razón para detener y registrar o arrestar a una persona. En su informe de septiembre de 2015, el Revisor Independiente llegó a la conclusión de que las estadísticas no constituyen una prueba de que las facultades previstas en el anexo 7 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000 (facultades para parar, interrogar y detener) se estuvieran ejerciendo de forma discriminatoria por motivos de raza.

28. Sigue habiendo mecanismos eficaces para lograr la rendición de cuentas de los SIA del Reino Unido, entre ellos el Tribunal para Cuestiones Relativas a las Facultades de Investigación y el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. El primero es un tribunal independiente que decide sobre las reclamaciones y denuncias formuladas por intromisiones ilegales de los organismos públicos, incluidos los SIA; este Tribunal puede ordenar que se ponga fin a la actividad, anular autorizaciones, ordenar que se destruya material y otorgar indemnizaciones. El Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad está integrado por miembros de las dos cámaras del Parlamento; supervisa los gastos, las

políticas y la administración de los SIA. El Gobierno del Reino Unido trabaja de manera constructiva con el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad para que se publique tanto como pueda publicarse del contenido de sus informes.

29. La Ley de Justicia y Seguridad de 2013 faculta a los tribunales superiores del Reino Unido a utilizar el “procedimiento aplicable cuando se maneja material reservado” en causas civiles que conlleven el uso de material confidencial cuya revelación sería perjudicial para la seguridad nacional²⁵. El proceso sigue ofreciendo garantías judiciales sólidas, y su aplicación está estrechamente supervisada por el Gobierno del Reino Unido, que presenta informes públicos anuales ante el Parlamento británico. Las estadísticas muestran que en los tres últimos años se ha recurrido a este procedimiento solo en contadas ocasiones.

Uso de las facultades de detención y registro²⁶

30. En agosto de 2014, el Gobierno del Reino Unido puso en marcha el plan “Best Use of Stop and Search” (El Mejor Uso del Régimen de Detención y Registro), en virtud del cual la policía tiene la obligación de considerar las repercusiones de la detención y el registro, sobre todo en los jóvenes y en la población de raza negra, origen asiático y minorías étnicas. Las denuncias sobre el ejercicio de las facultades de detención y registro por parte de la policía pueden dirigirse a la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía.

31. En Escocia, la Policía de Escocia ha suprimido la práctica de detención y registro de menores de 12 años, no contemplada en disposiciones legislativas. El Gobierno de Escocia también ha adoptado medidas legislativas para que la policía publique datos desglosados sobre las detenciones y los registros.

Expulsión con garantías²⁷

32. El Gobierno del Reino Unido considera que debe tener la capacidad de expulsar a los extranjeros que representen una amenaza para la seguridad nacional a países en los que haya garantías verificables de que no serán torturados. Los tribunales del Reino Unido y el TEDH consideraron que las garantías diplomáticas constituyen una opción adecuada y legal para proteger el bienestar de las personas expulsadas. El Gobierno del Reino Unido ha publicado en su sitio web información relativa a los “Memorandos de Entendimiento sobre Expulsiones con Garantías” entre el Reino Unido y otros países (en concreto, Etiopía, Jordania, el Líbano, Marruecos y Argelia).

Trato a los detenidos²⁸

33. En todo el Reino Unido las dependencias de detención siguen siendo supervisadas sistemáticamente y de forma independiente por los miembros del mecanismo nacional de prevención establecido por el Reino Unido en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2009.

Inglaterra y Gales

34. En noviembre de 2016, el Gobierno del Reino Unido publicó las propuestas “Prison Safety and Reform” (Reforma y Seguridad Penitenciaria), en que expone las medidas que adoptará para hacer de las prisiones un lugar seguro y reformarlas, entre otras cosas realizando inversiones adicionales y cambiando métodos de trabajo instaurando un nuevo criterio para las intervenciones de emergencia por parte de la Secretaría de Justicia, así como construyendo nuevas prisiones. En noviembre de 2016, el Gobierno del Reino Unido revisó su política sobre la gestión y el tratamiento de los delincuentes transgénero y llegó a la conclusión de que tratar a una persona según el género con el que se identifica, y no según el que se le reconoce legalmente, es el medio más seguro y eficaz a la hora de decidir sobre distintas cuestiones, como la ubicación inicial en cárceles de varones y mujeres. También se ha estado llevando a cabo, desde enero de 2016, un examen independiente de la proporción de personas de raza negra, origen asiático y minorías étnicas que hay en el sistema de justicia penal (el Examen Lammy), cuyos resultados están previstos para 2017.

35. Los presos siguen gozando de derechos tales como la posibilidad de ponerse en contacto con un abogado y recibir apoyo si tienen problemas de salud mental. No obstante, en caso necesario se puede separar a un preso (aislándolo del grupo) para mantener el orden o si se considera poco seguro que permanezca en los espacios habituales, y cuando los esfuerzos por controlar su conducta en esos espacios habituales hayan resultado infructuosos. Los presos también pueden ser separados del grupo por sanciones disciplinarias de aislamiento a raíz de infracciones del reglamento penitenciario. El aislamiento solo debe aplicarse cuando sea necesario, como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Los reclusos que hayan sido aislados siguen teniendo acceso a las duchas y derecho a llamadas telefónicas, visitas y ejercicio diario. Los funcionarios y los profesionales de la salud realizan controles de seguridad frecuentes y periódicos, de día y de noche, de los presos que se encuentran en situación de aislamiento.

36. El Gobierno del Reino Unido está modernizando las prisiones con objeto de reducir el hacinamiento y estar en mejores condiciones de combatir la reincidencia. Otras medidas para contribuir a reducir la reincidencia son por ejemplo, desde el 1 de febrero de 2015, que todos los delincuentes que salen en libertad tras cumplir penas de prisión breves sean supervisados en la comunidad durante 12 meses; la mayoría de los infractores también recibe apoyo constante de un asistente desde la detención hasta la puesta en libertad, por ejemplo en forma de ayuda y de recomendaciones para obtener vivienda, empleo y capacitación.

37. El Gobierno del Reino Unido ha designado todas las prisiones de mujeres como de reasentamiento, lo que permite a las reclusas encontrarse cerca de sus casas mientras llevan a cabo toda la rehabilitación pertinente en función del delito cometido. El Gobierno del Reino Unido también ha publicado una Instrucción actualizada sobre Libertad Condicional relativa a los informes previos a las sentencias para velar por que se presenten ante el tribunal todas las opciones no privativas de libertad posibles; esto incluye una declaración de autoevaluación en la que se pregunta a las infractoras si son las principales encargadas del cuidado de otras personas, o si han estado embarazadas o han dado a luz en los últimos seis meses. Se han habilitado espacios en dependencias para madres y bebés para las reclusas que estén embarazadas o que tengan hijos menores de 18 meses, a fin de que puedan seguir cuidando de sus hijos en los casos en que se considere que ello redundaría en el interés superior del niño; los bebés pueden pasar tiempo fuera de la cárcel con cuidadores designados.

38. La postura del Gobierno del Reino Unido con respecto a la edad mínima de responsabilidad penal sigue siendo que los niños de 10 años son capaces de diferenciar entre mala conducta y una infracción grave, por lo que es lógico que rindan cuentas de sus actos. No obstante, la privación de libertad de los menores que tienen entre 10 y 17 años sigue siendo una opción de último recurso.

39. En la revisión de 2016 del Código de Práctica para Gales de la Ley de Salud Mental de 1983 se hace referencia específica al compromiso de reducir el recurso a la detención policial para los niños detenidos en virtud de la Ley de Salud Mental, así como a la inversión continua en servicios de salud mental para los detenidos en condiciones de seguridad. En septiembre de 2015 se puso en marcha el proyecto “Women’s Pathfinder” (Orientación para la Mujer), financiado por el Gobierno de Gales, con el fin de prestar servicios a las mujeres que entran en contacto con el sistema de justicia penal galés.

Irlanda del Norte

40. La Ley de Justicia (Irlanda del Norte) de 2015 modificó plenamente los objetivos reglamentarios del sistema de justicia juvenil para reflejar el principio del “interés superior del niño” con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño. El recurso al internamiento preventivo de los niños fue una de las consideraciones clave del estudio preliminar que se realizó sobre los niños en el sistema de justicia. No existe una solución sencilla, del mismo modo que no existe una única causa fundamental del problema, sino más bien una variedad de causas, como demoras en la tramitación de los casos, falta de alojamiento alternativo viable en la comunidad y la necesidad de revisar las disposiciones legislativas. Se está estudiando la posibilidad de abordar cada una de estas cuestiones con miras a recurrir al internamiento solo en última instancia.

Escocia

41. La población penitenciaria de Escocia ha seguido disminuyendo en los últimos años y se está estabilizando. El Servicio Penitenciario de Escocia continúa invirtiendo en la modernización de las prisiones y aplicando su programa de transformación, que se centra en impulsar un enfoque basado en los activos y centrado en las personas para invertir en servicios de rehabilitación y reintegración. El Gobierno de Escocia está decidido a reducir las penas de prisión de corta duración recurriendo en mayor medida a sentencias de prestación efectiva de servicios comunitarios.

42. El Gobierno de Escocia anunció su decisión de construir una nueva prisión nacional para mujeres en el emplazamiento actual de la Prisión de Su Majestad de Cornton Vale y hasta cinco pequeñas dependencias de detención comunitarias en toda Escocia. Asimismo, ha ampliado el presupuesto de los órganos de justicia locales para la prestación de servicios destinados a las mujeres de la comunidad local. La Ley de Justicia Penal (Escocia) de 2016 introduce una disposición en virtud de la cual se requiere que el Servicio Penitenciario de Escocia pregunte a los reclusos si son padres o tutores de un niño. En caso afirmativo, debe pedirse al progenitor que facilite la información necesaria para que el Servicio Penitenciario pueda identificar al proveedor de servicios de Persona Designada para un niño (con arreglo a la Ley de la Infancia y la Juventud (Escocia) de 2014).

43. Al examinar la posibilidad de llevar a un niño a un centro de internamiento, un responsable de servicios sociales debe determinar la finalidad y los objetivos de ese internamiento atendiendo a la evaluación del comportamiento y las necesidades del niño, así como a la capacidad del establecimiento para cumplir esa finalidad y esos objetivos. El internamiento en centros de detención tiene por objeto rehabilitar a los niños y, cuando sea necesario, proteger a los ciudadanos, y solo puede producirse cuando se cumplen ciertos requisitos. En Escocia ningún menor de 16 años ingresa en prisión. Los jóvenes que se encuentran internados en centros nunca están en régimen de aislamiento.

44. El Gobierno de Escocia anunció el 1 de diciembre de 2016 que presentará un proyecto de ley en el actual período de sesiones del Parlamento para aumentar la edad mínima de responsabilidad penal de los 8 a los 12 años, con salvaguardias adecuadas en lo relativo a aspectos como el muestreo forense y la gestión de riesgos. Así se equiparará la edad de responsabilidad penal con la edad mínima de procesamiento en Escocia.

Acceso a la justicia*Inglaterra y Gales*

45. El ámbito de aplicación del plan de asistencia jurídica gratuita para asuntos civiles en Inglaterra y Gales se reformó en 2013 en el marco de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los Delincuentes de 2012. La asistencia jurídica gratuita sigue estando disponible en los casos más graves (por ejemplo, cuando está en juego la vida o la libertad de personas, cuando alguien puede perder su vivienda, en los casos de violencia doméstica o cuando los hijos puedan ser separados de sus padres y puestos bajo tutela). Cabe la posibilidad de beneficiarse de fondos destinados a casos excepcionales para asuntos que normalmente no cubre la asistencia jurídica gratuita. Puede haber fondos excepcionales disponibles en los casos en que la falta de asistencia letrada vulneraría los derechos del demandante en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos o la legislación de la Unión Europea (o sí, teniendo en cuenta el riesgo de vulneración, resulta conveniente proporcionar financiación), previa comprobación de los medios de vida y de la justificación de la ayuda. Cuando un niño refugiado que pide autorización para permanecer en el Reino Unido sea solicitante de asilo, podrá contar con asistencia jurídica gratuita si cumple los requisitos en cuanto a los medios de vida y la justificación de esa ayuda. Cuando la inmigración obedezca a otras causas, un tutor u otro asesor podrán brindar ayuda cumplimentando formularios, explicando condiciones y proporcionando apoyo emocional. Los servicios sociales tienen acceso a un directorio en línea de proveedores de servicios jurídicos, administrado por el Organismo de Asistencia Jurídica, lo que contribuye a garantizar que un niño no acompañado pueda acceder a los servicios que necesita. El Gobierno del Reino Unido se comprometió a revisar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los Delincuentes en un plazo de entre tres y cinco años desde su

entrada en vigor, es decir, antes del año 2018. El momento y el modo exactos en que se efectuará la revisión dependerán de la evaluación que haga el Gobierno del Reino Unido del grado de estabilidad al que se ha llegado con las reformas, así como del estudio y las pruebas del Gobierno y de las partes interesadas acerca de los efectos de las reformas. El Gobierno del Reino Unido sigue observando estrechamente las repercusiones de los cambios para asegurarse de que los niños tengan acceso a asistencia jurídica gratuita cuando la necesiten.

46. El Gobierno del Reino Unido posibilita un acceso efectivo a los tribunales y juzgados mediante un sistema de exoneración de las tasas judiciales que evita que se vean privados de ese acceso quienes no puedan pagarlas. El plan de exoneraciones va dirigido a los hogares vulnerables de bajos ingresos que se benefician de ciertas prestaciones del Estado. En junio de 2015, el Gobierno del Reino Unido anunció un examen retrospectivo de las tasas de los tribunales de trabajo en todo el país. Este examen, publicado en enero de 2017, incluía un análisis de las repercusiones de las tasas respecto de características protegidas por la Ley de Igualdad de 2010. En noviembre de 2016, el Gobierno del Reino Unido anunció una revisión de las tasas de los recursos judiciales ante la Sala de Inmigración y Asilo. Se analizarán esas tasas, junto con las de otros tribunales administrativos, y se tendrá en cuenta el contexto general de financiación para todo el sistema.

Escocia

47. En Escocia, la asistencia jurídica gratuita sigue siendo de amplio alcance y se presta en función de la demanda. Tienen derecho a este tipo de asistencia todas las personas que reúnan ciertos requisitos, incluidos los niños, quienes pueden obtenerla para una variedad de asuntos tan amplia como los adultos, siempre y cuando tengan capacidad para dar instrucciones a un abogado. En virtud de la Ley de Justicia Penal (Escocia) de 2016, toda persona que se encuentre detenida en una comisaría de policía tiene derecho a una consulta en privado con un abogado y a que un abogado esté presente durante el interrogatorio, lo que también se aplica a quienes se personen voluntariamente para un interrogatorio siendo sospechosos de haber cometido un delito. En su programa de gobierno de 2015, el Gobierno de Escocia se comprometió a suprimir las tasas de los tribunales de trabajo una vez quedara claro cómo se llevaría a cabo la transferencia de competencias y responsabilidades.

B. Derechos económicos, sociales y culturales

Empresas y derechos humanos

48. El Reino Unido fue el primer país en elaborar un plan de acción nacional, en septiembre de 2013, y también el primero en revisarlo y actualizarlo, en mayo de 2016. El Gobierno del Reino Unido ha adoptado medidas concretas para promover las actividades empresariales y los derechos humanos, entre otras cosas mediante la Ley sobre la Esclavitud Moderna de 2015, las enmiendas a la Ley de Sociedades de 2006 y las orientaciones ofrecidas a sectores específicos. El Gobierno del Reino Unido continúa además alentando una amplia adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como la colaboración entre el Gobierno, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil en ese proceso.

49. El Plan de Acción Nacional de Escocia para los Derechos Humanos incluye el compromiso de elaborar un conjunto de actuaciones coordinadas para aplicar en Escocia los Principios Rectores sobre la base del Plan de Acción Nacional del Reino Unido. Se ha publicado una evaluación de referencia de ámbito nacional.

Reformas del sistema de asistencia social²⁹

50. El Gobierno del Reino Unido estima que la Ley de Reforma del Sistema de Bienestar de 2012 y la Ley de Reforma del Sistema de Bienestar y Trabajo de 2016 son los pilares fundamentales de su estrategia. El Gobierno del Reino Unido quiere que el sistema de sanciones relativas a las prestaciones sea claro, justo y eficaz para promover

comportamientos positivos, por lo que somete su política a un examen permanente para asegurarse de que cumple esos objetivos. La simplificación y reforma del sistema de asistencia social comprende, entre otras medidas, la introducción del “Crédito Universal” y la sustitución de seis fuentes de ayuda financiera preexistentes por un único pago mensual para personas de bajos ingresos, con independencia de si trabajan o no. La estrategia incentiva a quienes puedan trabajar, entre otras cosas mediante las sanciones que corresponda, a que busquen empleo o lo conserven y a que aumenten sus ingresos en lugar de depender de las prestaciones. A los solicitantes se les pide únicamente que cumplan ciertos requisitos razonables para ayudarlos a prepararse o a buscar un empleo con arreglo a sus circunstancias y su capacidad individuales, entre otras cosas su estado de salud, su situación de discapacidad y sus responsabilidades en materia de cuidado de otras personas. Los requisitos se explican detalladamente y las condiciones se acuerdan con los solicitantes.

Lucha contra la pobreza³⁰

51. Para el Gobierno del Reino Unido es prioritario combatir las situaciones de desventaja y pobreza infantil, así como garantizar una justicia social real. En última instancia, el trabajo ofrece la mejor vía para salir de la pobreza, y ese planteamiento funciona, como demuestra la tasa de empleo del Reino Unido, que se encuentra en máximos históricos. Mediante las disposiciones de la Ley de Reforma del Sistema de Bienestar y Trabajo de 2016, el Gobierno del Reino Unido ha introducido nuevas medidas legales que impulsarán las actuaciones para reducir el desempleo de los progenitores y mejorar el nivel educativo de los hijos, los dos aspectos que marcan la principal diferencia para las vidas de los niños desfavorecidos y sus familias. El libro verde sobre justicia social, que se publicará próximamente, se basará en esas medidas y detallará el enfoque del Gobierno del Reino Unido para abordar el problema de las personas desfavorecidas. El Gobierno del Reino Unido está actuando específicamente para facilitar el acceso al empleo, ayudar a las personas a progresar en su trabajo y reducir el coste básico de la vida (entre otras cosas, aumentando el salario mínimo vital a escala nacional y la cantidad de ingresos libre de impuestos).

52. En Irlanda del Norte, el ejecutivo ha establecido un programa de pagos complementarios en materia de asistencia social para ayudar a los grupos en la transición hacia el nuevo sistema de asistencia social. Ha destinado 501 millones de libras esterlinas a distintos de planes de mitigación; por ejemplo, recibirán apoyo financiero las personas con discapacidad, las que cuidan de personas con discapacidad y las familias con hijos. La Ley de Oportunidades en la Vida de 2010 exige que el Ejecutivo de Irlanda del Norte publique una estrategia de lucha contra la pobreza infantil, de la que debe informar anualmente, y que la someta a revisión cada tres años. La estrategia actual, publicada en marzo de 2016, se orienta tanto a reducir el número de niños en situación de pobreza como a reducir los efectos de la pobreza en los niños. En 2013 entró en vigor el “Programa de Actualización de Prestaciones”, que tiene por objeto velar por que todas las personas y todos los hogares reciban todas las prestaciones de la seguridad social a las que tanto ellos como sus familias tienen derecho.

53. El Gobierno de Escocia invirtió 296 millones de libras esterlinas entre 2013 y 2016 para ayudar a las personas a través del Fondo de Bienestar Social de Escocia, los Pagos Discrecionales para la Vivienda, el Plan de Reducción del Impuesto sobre la Vivienda y otras actividades, como servicios de asesoramiento y apoyo para la defensa de sus derechos. Además, en 2016-17 se han destinado más de 100 millones de libras esterlinas a mantener el gasto en esas iniciativas. El “Plan de Acción para una Escocia más Justa”, presentado en octubre de 2016 por el Gobierno de Escocia, se fundamenta en cinco objetivos de alto nivel para el período hasta 2030: una Escocia más justa para todos; la erradicación de la pobreza infantil; un buen comienzo para todos los jóvenes; una vida laboral más justa; y una tercera edad próspera. Entre las acciones del Plan figuran las siguientes: una nueva obligación socioeconómica para las autoridades públicas; compromisos para promover condiciones de trabajo flexibles y de calidad; y un nuevo fondo de 29 millones de libras esterlinas (12,5 millones de libras procedentes de fondos europeos) para ayudar a las comunidades y al “tercer sector” a idear enfoques nuevos e innovadores para hacer frente a la pobreza.

54. Entre las prioridades del Gobierno de Gales en la lucha contra la pobreza infantil se encuentran el desarrollo de una economía sólida que apoye la agenda de reducción de la pobreza y del desempleo, el desarrollo de competencias, la reducción de desigualdades en materia de salud y de resultados educativos (mejorando los de la población más desfavorecida) y el apoyo a las familias para que incrementen sus ingresos. Asimismo, con el apoyo del Gobierno de Gales se creó la “Alianza Galesa contra la Pobreza Alimentaria” a fin de aumentar la cantidad de alumnos que se benefician de comidas gratuitas en las escuelas, entre otros objetivos.

Promoción de la igualdad de género, los derechos de las personas de edad y los derechos de las personas con discapacidad

Medidas contra la desigualdad salarial por razón de género³¹

55. En el Reino Unido, la desigualdad salarial por razón de género es actualmente del 18,1%, el nivel más bajo de su historia. Entre las medidas para corregir esa desigualdad se ha establecido que las empresas de más de 250 trabajadores, que representan aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo total, presenten informes sobre las diferencias salariales por razón de género. Los datos que deberán publicar son, entre otros: media y mediana de las diferencias salariales por razón de género; media y mediana de las diferencias entre bonificaciones por razón de género; proporción de empleados y empleadas que recibieron una bonificación; y cuartiles salariales. Deben publicar esos datos anualmente.

56. En Irlanda del Norte, la actual Estrategia sobre la Igualdad de Género abarca el período comprendido entre 2006 y 2016. El artículo 19 de la Ley de Empleo (Irlanda del Norte) de 2016 establece que los empleadores deben publicar información que indique si en la remuneración de sus empleados existen disparidades por razón de género. Cuando se detecten diferencias de remuneración por razón de género, el empleador estará obligado a publicar un plan de acción para eliminarlas.

57. En Escocia, la desigualdad salarial por razón de género entre empleados a tiempo completo se redujo desde el 7,7% en 2015 hasta el 6,2% en 2016. En febrero de 2016, el Gobierno de Escocia amplió el abanico de autoridades públicas pertinentes que debían informar de las diferencias salariales por razón de género y publicar declaraciones sobre igualdad de remuneración y segregación ocupacional. Tras la adopción de esa medida, están obligadas a presentar informes todas las que tengan más de 20 empleados, en lugar de las que cuenten con más de 150, como anteriormente.

58. El Gobierno de Gales introdujo en el sector público la sólida obligación, destinada a promover la igualdad, de combatir las diferencias de remuneración y empleo, en particular las diferencias salariales por razón de sexo. Todos los empleadores del sector público de Gales están obligados a informar anualmente de las disparidades en las remuneraciones y a combatir las diferencias de remuneración y empleo.

Derechos de las personas de edad

59. Entre otras medidas, el Gobierno del Reino Unido ha ampliado el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible a todos los empleados que cumplan los requisitos para ello y ha introducido la inclusión automática en un plan de pensiones en el lugar de trabajo. La Ley de Cuidados de 2014 da prioridad a la independencia y el bienestar, y brinda a las personas una mayor capacidad de elección y control de su cuidado. La Age Action Alliance, una asociación que integra a representantes de la sociedad civil y organizaciones de los sectores público y privado, trabaja para encontrar nuevas formas de ayudar a mejorar la vida de las personas de edad más desfavorecidas y evitar privaciones en etapas posteriores de la vida. El Reino Unido también seguirá colaborando de manera constructiva en los debates internacionales sobre los derechos de las personas de edad, incluidos los que estén relacionados con el desarrollo de nuevas normas.

60. En Irlanda del Norte, las personas de edad gozan de protección en virtud de las leyes nacionales de derechos humanos e igualdad, como la Ley de Derechos Humanos de 1998 y el artículo 75 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998. El Departamento de Salud vela por

que las normas relativas a las personas de edad y su cuidado que estén en fase de elaboración o de revisión se basen en la Ley de Derechos Humanos de 1998 y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

61. En Escocia, el Fondo de Bienestar Social presta asistencia a personas de bajos ingresos que necesiten superar una crisis o emergencia, o bien establecerse o permanecer en su propio hogar cuando exista el riesgo de tener que recurrir a una residencia. La Ley de Organismos Públicos (Trabajo Conjunto) (Escocia) de 2014 exige la integración a escala local de los servicios de salud y atención social de adultos para garantizar que los usuarios de esos servicios reciban la atención y el apoyo debidos, sean cuales sean sus necesidades. La tercera Estrategia Nacional Trienal sobre la Demencia se centrará, entre otras prioridades, en procurar aumentar el número de diagnósticos tempranos.

62. En Gales, la “Declaración de Derechos de las Personas de Edad” expone los derechos de los que ya disfrutaban por ley las personas mayores, entre otras cosas en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1998 y la Ley de Igualdad de 2010.

Derechos de las personas con discapacidad

63. El Gobierno del Reino Unido está decidido a posibilitar que todas las personas con discapacidad puedan desarrollar su potencial y lograr sus aspiraciones. Hay una gran variedad de programas e iniciativas relacionados con el empleo para ayudar a las personas con discapacidad a acceder al trabajo, los cuales incluyen ayudas para cubrir los gastos adicionales que afrontan las personas cuya manera de trabajar se ve afectada por su salud o discapacidad. Desde 2012, las reformas del sistema de asistencia social han incluido medidas para que las personas con discapacidad reciban el apoyo que necesitan. Por ejemplo, los solicitantes en situación vulnerable no están sujetos al máximo fijado para el monto de las prestaciones. En abril de 2017, el Gobierno del Reino Unido también seguirá cumpliendo su obligación legal de aumentar las prestaciones para satisfacer necesidades adicionales relacionadas con la discapacidad, así como las prestaciones para cuidadores, en consonancia con el incremento de los precios. El Gobierno del Reino Unido ha publicado un Libro Verde sobre Trabajo, Salud y Discapacidad, y está tratando de mejorar aún más el apoyo a las personas con discapacidad en el trabajo, con el objetivo más a largo plazo de reducir a la mitad la brecha laboral entre personas con discapacidad y sin ella. Asimismo, el Gobierno del Reino Unido ha encargado un estudio independiente para ayudar a las personas con problemas de salud mental a prosperar en el lugar de trabajo.

64. En Irlanda del Norte, la Estrategia en materia de Autismo (2013-2020) y el Plan de Acción en materia de Autismo (2013-2016) tienen por objeto mejorar la vida de las personas con autismo y la de sus familias. Ya casi ha concluido el proceso de reubicación en la comunidad de pacientes de ingreso prolongado en hospitales por problemas de salud mental y discapacidades en materia de aprendizaje; la experiencia indica claramente que la calidad de vida de las personas que han sido reubicadas ha mejorado mucho. El Plan de Transporte de Disability Action proporciona servicios especializados de transporte individual para las personas que cumplen los requisitos de afiliación y tienen dificultades para utilizar el transporte público.

65. El 2 de diciembre de 2016, el Gobierno de Escocia publicó su nuevo plan de ejecución en materia de discapacidad, “Una Escocia más Justa para las Personas con Discapacidad”, orientado a eliminar las barreras que pueden encontrar las personas con discapacidad a la hora de buscar empleo y mantenerlo, así como para desarrollarse profesionalmente. El Gobierno de Escocia también está elaborando un marco para prestar apoyo a los niños con discapacidad y a sus familias, y está decidido a asegurar que todas las personas que deseen trabajar puedan encontrar empleos satisfactorios. Entre las medidas adoptadas para incrementar el número de personas con discapacidad que trabajan figuran las siguientes: la Estrategia para el Empleo Juvenil en Escocia, estrategias sobre autismo y discapacidad en materia de aprendizaje y un modelo de empleo asistido.

66. El objetivo del Marco de Acción para la Vida Independiente (publicado por el Gobierno de Gales en 2013 y actualmente en fase de revisión) consiste en promover los derechos de las personas con discapacidad en Gales y posibilitar su plena participación en la sociedad.

Derechos sindicales

67. La Ley de Sindicatos de 2016 se introdujo para modernizar el marco de las relaciones laborales en el Reino Unido. Entre otras medidas, introdujo umbrales mínimos de votación (un 50% de participación en todas las votaciones sobre medidas de acción reivindicativa y un 40% de apoyo en favor de la acción sindical para determinados servicios públicos importantes). Ninguna de las reformas previstas en la Ley se orienta a la prohibición de las huelgas, sino a velar por que estas se produzcan únicamente a consecuencia de una decisión clara e inequívoca de quienes tienen derecho a voto. Además, la Ley (Unificada) de Sindicatos y Relaciones Laborales de 1992 prohíbe la discriminación por motivos de pertenencia a un sindicato.

Vivienda

Medidas para combatir el problema de las personas sin hogar

68. En Inglaterra, la Parte 7 de la Ley de Vivienda de 1996 proporciona una sólida red de protección social para las familias vulnerables que corren el riesgo de quedarse sin hogar. Las autoridades locales deben velar por que cualquier persona de su distrito tenga acceso a información y a asesoramiento gratuitos sobre la falta de hogar y su prevención, además de proporcionar alojamiento a las familias con derecho a ello que carezcan de hogar por causas ajenas a su voluntad y se encuentren en situación de necesidad prioritaria. El Gobierno del Reino Unido ha ampliado el presupuesto para los programas de lucha contra el problema de las personas sin hogar a 149 millones de libras esterlinas hasta 2019/20. Esta dotación incluye un programa de 20 millones de libras esterlinas para intervenciones rápidas que permitan evitar que personas en situación de riesgo terminen durmiendo en la calle, y 10 millones de libras esterlinas para ayudar a entre 1.500 y 2.000 personas con necesidades complejas (como problemas de toxicomanía y de salud mental) a romper el ciclo de la falta de hogar.

69. En Escocia, desde 2012 todas las personas que a juicio de las autoridades locales se hayan quedado sin hogar por causas ajenas a su voluntad tienen derecho a un alojamiento estable. Además, la ley establece que cualquier persona que corra el riesgo de quedarse sin hogar o que ya se haya quedado sin él tiene derecho a un mínimo de alojamiento temporal, asesoramiento y asistencia de las autoridades locales. Para la prevención de la falta de hogar, el Gobierno de Escocia ha priorizado el enfoque integral centrado en las personas del programa “Opciones de Vivienda”, que incluye intervenciones tempranas y un examen de todas las posibles opciones de tenencia. En el Decreto de 2014 (Escocia) sobre las Personas sin Vivienda (Alojamiento Inadecuado) se indican las condiciones de alojamiento que, salvo en casos excepcionales, resultarían inadecuadas para las familias con niños y mujeres embarazadas.

70. La Ley de Vivienda (Gales) de 2014 exige a las autoridades locales que ayuden a prevenir la falta de hogar de todas las personas contempladas en esa norma, independientemente de la composición de su familia o sus circunstancias personales. Para facilitar el cumplimiento de esa obligación, se prepararon nuevas orientaciones. En 2015/16, se destinaron otros 5,6 millones de libras esterlinas, a través del Subsidio para la Prevención de la Falta de Hogar, con la finalidad de ayudar a las autoridades locales a atender las nuevas obligaciones. En 2016 se introdujo la Ley de Viviendas de Alquiler (Gales) para simplificar y facilitar los alquileres.

Población gitana y grupos itinerantes

71. El Reino Unido cuenta con un marco jurídico sólido y bien establecido que protege a todas las personas, incluidos la población gitana y los grupos itinerantes, frente a la discriminación racial y otras formas de discriminación.

72. Las autoridades locales son responsables de proveer un número suficiente de emplazamientos para gitanos y grupos itinerantes a través del sistema de urbanismo. Deben evaluar objetivamente las necesidades de movilidad de estos grupos e identificar una oferta adecuada de emplazamientos por un período de cinco años para satisfacer esas necesidades. En noviembre de 2016, el Gobierno del Reino Unido anunció que ampliaría con

1.400 millones de libras esterlinas la dotación para el Programa de Propiedad Compartida y Viviendas Asequibles 2016-2021. Los emplazamientos para los grupos itinerantes se financiarán con el módulo Alquiler Asequible del Programa.

73. En Irlanda del Norte, la “Estrategia de Igualdad Racial 2015-2025” reconoce que podría ser necesario adoptar programas de trabajo específicos para abordar los desafíos y las vulnerabilidades particulares a que se enfrentan algunos grupos, como los romaníes y los itinerantes irlandeses. La Dirección de la Vivienda de Irlanda del Norte establece y gestiona las necesidades de alojamiento de los itinerantes mediante el Programa de Evaluación Integral de las Necesidades de Alojamiento de los Grupos Itinerantes.

74. El Gobierno de Escocia ha asignado en 2016/17 más de 200.000 libras esterlinas a organizaciones que trabajan con comunidades gitanas y grupos itinerantes, y ha hecho públicos los criterios mínimos de calidad que deben cumplir los emplazamientos para esas comunidades, así como los derechos y deberes fundamentales de los ocupantes de los emplazamientos. La Ley de la Vivienda (Escocia) de 2001 exige a las autoridades locales que preparen una estrategia local de vivienda sobre la base de una evaluación de la provisión de viviendas y de los servicios conexos.

75. En Gales, la Ley de Vivienda (Gales) de 2014 impone a las autoridades locales la obligación de proporcionar emplazamientos a las comunidades gitanas e itinerantes a fin de satisfacer las necesidades identificadas en las evaluaciones de las necesidades de alojamiento de esas comunidades. Estas necesidades comprenden la disponibilidad de emplazamientos residenciales y de tránsito que satisfagan los criterios revisados que figuran en la guía del Gobierno de Gales sobre emplazamientos para comunidades gitanas y grupos itinerantes. Desde 2012, el Gobierno de Gales ha invertido aproximadamente 12 millones de libras para crear dos nuevos emplazamientos, ampliar cinco más y reacondicionar otros muchos a través de un programa de subsidios para emplazamientos. También ha publicado orientaciones para mejorar los resultados de salud de las comunidades gitanas y los grupos itinerantes y el apoyo educativo recibido por estas.

Protección de los derechos del niño³²

Inglaterra

76. La legislación y las políticas vigentes siguen haciendo efectivos los derechos y las obligaciones dimanantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se tiene debidamente en cuenta al elaborar nuevas leyes o políticas. La Ley de la Infancia de 1989 establece que todos los tribunales deben considerar prioritariamente el bienestar del niño en cualquier asunto relacionado con su crianza. Los niños que sean objeto de un procedimiento que afecte a su guarda y tutela contarán con un tutor y un abogado que los represente. También existen tribunales especializados para niños con necesidades educativas especiales, así como procedimientos generales de denuncia para situaciones en que el niño no esté satisfecho, por ejemplo, con su cuidado o educación. La Ley de los Niños y las Familias de 2014 dio mayor independencia al Comisionado para la Infancia de Inglaterra, que ahora puede aconsejar y brindar asistencia a niños individuales que reciban asistencia de los servicios sociales o no vivan en su hogar, así como realizar un seguimiento de la eficacia de los servicios de denuncia y defensa previstos para los niños.

77. Desde 2011, la brecha en materia de logros entre los alumnos desfavorecidos y sus pares se ha reducido tanto en la etapa básica 2 (11 años) como en la etapa básica 4 (16 años). La prima estudiantil, que asciende a 2.500 millones de libras esterlinas en 2016, proporciona a las escuelas fondos adicionales para ayudar a los alumnos desfavorecidos a mejorar su rendimiento, con independencia de su capacidad. El Gobierno del Reino Unido ha proporcionado a la Education Endowment Foundation 137 millones de libras esterlinas para ampliar la base empírica acerca de las medidas que mejor funcionan para mejorar el rendimiento de los alumnos desfavorecidos y comunicar sus conclusiones a las escuelas.

78. El Gobierno del Reino Unido no tolera ningún tipo de violencia contra los niños y la legislación señala claramente cómo hacer frente a esos actos. No obstante, no debe criminalizarse a los padres por dar un pequeño azote a sus hijos para controlar su comportamiento. La eximente del “castigo razonable” solo procede cuando la acusación es

de agresión común; no es admisible ante acusaciones de agresión con resultado de lesiones corporales graves o efectivas o de trato cruel a un niño.

Irlanda del Norte

79. El Departamento de Salud publicó en marzo de 2016 una actualización de la orientación normativa sobre la protección de la infancia, “Cooperación para Proteger a los Niños y Jóvenes en Irlanda del Norte”. Esta orientación proporciona un marco regional para la protección de los niños y los jóvenes que abarca todo el espectro de actividades de promoción, prevención, intervención temprana y protección para los sectores legal, privado, independiente, comunitario, de beneficencia, religioso y de voluntariado. La “Estrategia para la Infancia y la Juventud” del Ejecutivo de Irlanda del Norte tiene por objeto lograr mejores resultados para los niños y los jóvenes, facilitar una mejor cooperación entre todos los órganos e interesados pertinentes y asegurar una ejecución más eficaz de actividades, programas y políticas. La Ley de Lucha contra el Acoso Escolar (Irlanda del Norte) de 2016 proporcionará una definición común de acoso escolar, establecerá que las escuelas deben mantener un registro centralizado de todos los incidentes de acoso, su motivación y sus resultados, y requerirá que la dirección de la escuela asuma colectivamente la responsabilidad de elaborar, aplicar, supervisar y evaluar periódicamente las políticas y procedimientos de la escuela contra el acoso escolar.

80. La Ley de Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad (Irlanda del Norte) de 2016 establece que las autoridades educativas deben tener en cuenta la opinión del niño al adoptar decisiones sobre sus necesidades educativas especiales. También otorga nuevos derechos a los niños que ya no se encuentran en edad de escolarización obligatoria, a los que reconoce una mayor independencia. Entre estos derechos se encuentran el de mediación y el de apelación.

81. La ley sobre el castigo físico está en consonancia con la de Inglaterra y Gales desde septiembre de 2006. También existen leyes y normas que prohíben los castigos corporales en los hogares infantiles, las guarderías y los hogares de guarda. Entre las medidas destinadas a promover una crianza positiva de los hijos y formas alternativas de disciplina figura la publicación de folletos informativos que incluyen consejos, recursos de apoyo y contactos útiles para padres y cuidadores.

Escocia

82. En virtud de la Ley de la Infancia y la Juventud (Escocia) de 2014, recae específicamente en los ministros escoceses la responsabilidad de estudiar medidas para garantizar un mejor cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en Escocia o para hacerla más efectiva, promover la sensibilización y el conocimiento de la opinión pública acerca de los derechos del niño e informar cada tres años al Parlamento de Escocia sobre los avances conseguidos y los planes para el siguiente trienio. La Ley también establece la obligación de que diversas autoridades públicas, incluidas las autoridades locales y las juntas de salud, informen cada tres años de las medidas adoptadas durante ese período para mejorar o potenciar la aplicación de los requisitos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando entren en vigor, las disposiciones de la Ley facultarán al Comisionado para la Infancia y la Juventud de Escocia a realizar investigaciones en nombre de niños individuales.

83. El Gobierno de Escocia puso en marcha el programa “Scottish Attainment Challenge” (El Desafío del Rendimiento Escolar en Escocia) para lograr una mayor equidad en los resultados académicos, trabajando sobre todo para acabar con las diferencias en materia de rendimiento escolar originadas por la pobreza. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo Escocés para Mejorar el Rendimiento Escolar, dotado con 750 millones de libras esterlinas, que actualmente se centra en el apoyo a las escuelas y autoridades de los lugares en que hay más alumnos en zonas de privaciones múltiples y que, a partir de 2017-18, proporcionará apoyo adicional a las escuelas en función del número de alumnos con derecho a recibir comidas gratuitas en ellas, de modo que quedarán incluidos aproximadamente el 95% de los centros escolares escoceses. El Gobierno de Escocia se hace cargo de las tasas de matrícula de los estudiantes a tiempo completo que cumplan ciertos requisitos, entre ellos tener domicilio en Escocia, y de los estudiantes de la UE que

estudien para un primer certificado o diploma superior nacional o un primer título universitario en una institución de educación superior escocesa. Existe una amplia oferta de becas y préstamos de estudios para garantizar la autosuficiencia de los estudiantes de enseñanza superior con domicilio en Escocia. Por otra parte, la garantía de un ingreso mínimo representa un apoyo financiero que ayuda a vivir a las familias más pobres.

84. La legislación vigente en Escocia prohíbe castigar a los niños zarandeándolos, golpeándolos en la cabeza o utilizando cualquier instrumento. El Gobierno de Escocia sigue oponiéndose al castigo físico de los niños, pero no tiene la intención de promover leyes que deroguen todas las eximentes jurídicas y prohíban el castigo corporal, ya que eso podría dar lugar a que se criminalizase a los padres por dar un pequeño azote a sus hijos.

Gales

85. La Medida sobre los Derechos de los Niños y los Jóvenes (Gales) de 2011 dispone que los ministros galeses han de tener en consideración la Convención sobre los Derechos del Niño en el desempeño de sus funciones. El Plan de los Derechos del Niño (2014) contiene las disposiciones del Gobierno de Gales para cumplir con ese deber, entre ellas una evaluación de las repercusiones en los derechos del niño.

86. En 2014 se publicó la propuesta “Rewriting the future: raising ambition and attainment in Welsh Schools” (Reescribir el futuro: elevar la ambición y el rendimiento escolar en Gales), en que se expone lo que las escuelas, en colaboración con los padres y cuidadores, pueden hacer para derribar las barreras a las que se enfrentan los niños de entornos desfavorecidos. El Subsidio para Alumnos en Situación de Necesidad proporciona ayuda financiera a las escuelas para hacer frente a los efectos de la pobreza en el rendimiento de los alumnos, así como para prestar apoyo a los niños sujetos a supervisión. En 2015-16 se introdujo el Subsidio para Alumnos en Situación de Necesidad en los Primeros Años para alumnos de 3 y 4 años de edad. En 2014, el Gobierno de Gales publicó “Travelling Together” (Viajando Juntos), un conjunto de recursos para promover la integración de la cultura gitana y de los grupos itinerantes en el programa nacional de estudios de Gales.

87. El Gobierno de Gales está decidido a promover, sobre la base de un consenso entre los partidos, leyes que eliminen el castigo razonable como eximente. La legislación que se proponga se enmarcará en un conjunto más amplio de medidas de promoción de una crianza positiva de los hijos. Si bien el objetivo es impulsar cambios, trabajará de la mano con métodos de crianza positiva y apoyo a esta.

Promoción de la salud³³

88. El Servicio Nacional de Salud sigue siendo universal para todos los residentes que cumplan los requisitos necesarios, y se rige por el criterio de la necesidad, no por la solvencia de los pacientes. La Ley de Salud y Atención Social de 2012 introdujo obligaciones legales en virtud de las cuales debía tenerse en cuenta la necesidad de reducir las desigualdades en materia de salud en las prestaciones que podían obtenerse de los servicios de salud. Los resultados de salud, como la esperanza de vida, han mejorado para todos los sectores de la población y, aunque persisten desigualdades en materia de salud, se han logrado algunos avances en la reducción de las diferencias referentes a la mortalidad infantil, las enfermedades coronarias y el cáncer. En 2012, el Gobierno del Reino Unido puso también en marcha una estrategia de prevención del suicidio, con una dotación de 1,5 millones de libras esterlinas para nuevas investigaciones, y está aplicando las recomendaciones del informe independiente “Five Year Forward View” (Perspectiva a Cinco Años Vista) sobre salud mental, con miras a reducir la tasa nacional de suicidio en un 10% para 2020/21 y a que el Servicio Nacional de Salud lleve a cabo a escala local planes interinstitucionales de prevención del suicidio para 2017. El Gobierno del Reino Unido habrá invertido 1.400 millones de libras esterlinas adicionales de aquí a 2020 en la mejora de los servicios de salud mental para niños y adolescentes. Los reclusos tienen derecho a recibir del Servicio Nacional de Salud una gama y calidad de servicios y tratamientos equivalente a la del resto de la comunidad, también en lo referente a la salud mental; la atención y el tratamiento se proporcionan según las necesidades clínicas. Los Servicios de Enlace y Remisión ofrecen intervenciones tempranas para personas de todas

las edades cuando entran en contacto por primera vez con el sistema de justicia penal. También informan a los responsables de la toma de decisiones del sistema de justicia penal cuando debe dictarse sentencia contra personas remitidas a esos Servicios. Los Servicios de Enlace y Remisión se prestan en comisarías de policía y tribunales de media Inglaterra y ayudan a los organismos judiciales a remitir a los delincuentes que se encuentran en situación vulnerable al lugar de tratamiento más adecuado para cumplir sentencia, que puede consistir en un tratamiento en la comunidad sin internamiento.

89. En Irlanda del Norte, el marco de salud pública “Making Life Better” (Mejorar la Vida) proporciona directrices para la adopción de medidas destinadas a mejorar la salud y reducir las desigualdades en ese terreno. Se basa en una serie de planes de acción y estrategias de promoción de la salud, por ejemplo en relación con el abuso del tabaco, el alcohol y las drogas, entre otras prioridades sanitarias. En marzo de 2016, el Departamento de Salud publicó una guía para los profesionales de la salud y la asistencia social sobre la interrupción del embarazo³⁴. Esta guía tiene por objeto proporcionar a los profesionales de los servicios sociales y de la salud una visión clara del marco legal de la interrupción del embarazo en Irlanda del Norte. Los Ministros de Salud y de Justicia están estudiando recomendaciones para mejorar la atención y el apoyo a las mujeres en los casos concretos en que se haya diagnosticado una anomalía letal del feto. La Ley de Capacidad Mental (Irlanda del Norte) de 2016 recibió la sanción real en mayo de 2016 y el Departamento de Salud ya ha empezado a trabajar en su aplicación.

90. Toda persona que resida legalmente en Escocia puede inscribirse en el registro de un médico de cabecera para recibir atención médica general del Servicio Nacional de Salud. Las medidas del Gobierno de Escocia para abordar las causas subyacentes de las desigualdades en materia de salud incluyen inversiones en vivienda asequible, comidas escolares gratuitas, continuidad en los compromisos para la adquisición gratuita de medicamentos con receta, viajes en condiciones favorables y atención personal gratuita, junto con medidas contundentes para hacer frente al consumo de alcohol, reducir las tasas de tabaquismo y fomentar una vida activa y una alimentación sana, además de inversiones para mejorar los servicios de salud mental. En 2011, el Gobierno de Escocia puso en marcha la Estrategia Escocesa en materia de Autismo, que se ha reformulado con un enfoque orientado a los resultados, sobre la base de cuatro indicadores clave, para que las personas con autismo gocen de los mismos derechos que los demás ciudadanos. En 2013, el Gobierno de Escocia puso en marcha la estrategia “Keys to Life” (Claves para la Vida), que se centra en la reducción de las desigualdades a que se enfrentan las personas con discapacidades de aprendizaje. El Gobierno de Escocia ha reservado 150 millones de libras esterlinas para invertirlos en mejorar la salud mental y está elaborando una nueva estrategia en ese terreno en la que se expondrá una visión para los próximos diez años y se describirá cómo se prevé abordar la transformación de los servicios. El Gobierno de Escocia está aplicando las disposiciones de la Ley de Salud Mental (Escocia) de 2015 y promoverá las actividades de defensa independiente y las declaraciones de voluntad anticipada, además de un enfoque basado en los derechos, en las directrices reglamentarias sobre el uso de la legislación sobre salud mental. El Servicio Penitenciario de Escocia ha financiado cursos para funcionarios de prisiones sobre el trato que debe darse a los reclusos con comportamientos difíciles y trastornos de la personalidad, y el Servicio Nacional de Salud presta un servicio *in situ* en establecimientos penitenciarios de toda Escocia en el que participa un equipo integrado por psiquiatras forenses y psiquiatras generales de adultos. Varios organismos del “tercer sector” también ofrecen servicios y apoyo adicionales para reclusos con problemas de salud mental. El 29 de noviembre de 2016, el Servicio Penitenciario de Escocia puso en marcha su nueva estrategia de prevención de suicidios, “Talk to Me” (Háblame), diseñada para que toda la comunidad penitenciaria colabore para identificar a personas que se encuentran en situación vulnerable, compartir información y alentar a quienes estén en situación de “riesgo” a aceptar ayuda y asistencia.

91. El Gobierno de Gales se comprometió a priorizar las necesidades, los derechos y las contribuciones de las personas con características protegidas en la concepción y la prestación de todos los servicios públicos, en particular los de salud general y salud mental. Se informará anualmente acerca de los avances en el cumplimiento de esos objetivos. En la Ley de Servicios Sociales y Bienestar (Gales) de 2014 se establece que todas las personas que ejerzan funciones en virtud de la Ley deben tener en consideración la Convención

sobre los Derechos del Niño y los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad. En 2015 el Gobierno de Gales anunció una inversión de 7,65 millones de libras esterlinas anuales en servicios de salud mental para niños y adolescentes. En 2012 se hizo pública la estrategia “Together for Mental Health” (Juntos por la Salud Mental), un plan decenal que tiene por objeto mejorar el bienestar y la salud mental, así como el cuidado y el tratamiento de las personas que utilizan los servicios de salud mental, sus cuidadores y sus familias.

Promoción del desarrollo en el exterior³⁵

92. El Reino Unido se ha comprometido a destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo. Los Objetivos Mundiales, que son clave en la estrategia de asistencia del Reino Unido, representan un compromiso con la consecución de avances significativos y cuantificables en materia de derechos económicos, sociales y políticos. Hay una serie de programas de asistencia para proteger y promover los derechos humanos en contextos como el de las mujeres y las niñas, la salud, la paz, la seguridad y la justicia.

V. Dependencias de la Corona y territorios de ultramar

93. El marco jurídico para la protección y promoción de los derechos humanos y para la lucha contra la discriminación en las DC y los TBU³⁶ se mantiene, en términos generales, como se indica en el DC2014³⁷. A continuación se resumen las principales novedades desde el año 2012.

Dependencias de la Corona

94. El programa de igualdad y derechos de Guernsey incluye ahora una serie de ejes de actividad específicos sobre discapacidad e inclusión, salud mental, licencia parental compartida y envejecimiento, entre otros. En 2016 se introdujo en Guernsey una ley para equiparar en derechos y deberes el matrimonio de personas del mismo sexo con el matrimonio entre hombres y mujeres, así como una norma reguladora de la licencia por maternidad y por adopción. Sark introdujo en 2016 una nueva ley de la infancia que define las responsabilidades de los padres y otras personas que están a cargo del cuidado de niños, de conformidad con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

95. En 2014 se hizo extensivo a la Isla de Man el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Por otra parte, a lo largo de 2016 se ha avanzado en la aplicación de las disposiciones de la Ley sobre Discriminación por Discapacidad de 2006 de la Isla de Man. También en 2016 se aprobó y entró en vigor la Ley del Matrimonio y la Unión Civil (Enmienda) de 2016, que posibilita el matrimonio entre personas de mismo sexo y la unión civil entre personas de distinto sexo. Se ha presentado ante el Tynwald (Parlamento de la Isla de Man) un proyecto de ley general de igualdad, fuertemente inspirado en la Ley de Igualdad de 2010.

96. En 2014 se hicieron extensivos a Jersey la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El Gobierno de Jersey ha introducido la Ley sobre Discriminación (Jersey) de 2013, que prohíbe la discriminación basada en determinadas características protegidas, que hasta la fecha incluyen la raza, el sexo, la orientación sexual y la reasignación de género, así como el embarazo y la maternidad. En 2015 la Policía de Jersey puso en marcha una nueva política con respecto a los delitos motivados por prejuicios en virtud de la cual se presta más atención a todas las denuncias de delitos que puedan estar motivados por hostilidad o prejuicios basados en la raza, la religión, la orientación sexual, la discapacidad o el género de una persona.

Territorios de ultramar

97. El Gobierno del Reino Unido sigue esperando que los TBU sigan observando las mismas normas básicas de derechos humanos que el Reino Unido. Se han registrado avances continuos desde 2012, pero los Gobiernos del Reino Unido y de los TBU son conscientes de que es necesario seguir trabajando y brindando apoyo para hacer realidad esa ambición. Hasta la fecha, se ha hecho extensivo a la mayoría de los TBU poblados al menos uno de los siguientes tratados de las Naciones Unidas: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Los seis tratados se han hecho extensivos a las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Falkland y las Islas Turcas y Caicos. En marzo de 2016, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se extendió a Anguila y a las Islas Caimán. En la reunión anual del Consejo Ministerial Conjunto de los TBU celebrada en noviembre de 2016, los Gobiernos del Reino Unido y de los TBU acordaron trabajar conjuntamente para avanzar en la aplicación de esos seis tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y examinar las reservas pendientes en nombre de los TBU. Proseguirá la colaboración para seguir desarrollando la capacidad de las INDH de los TBU, de conformidad con los Principios de París, así como para promover la comprensión de las obligaciones internacionales compartidas en materia de derechos humanos.

98. El 16 de noviembre de 2016, el Gobierno del Reino Unido anunció su decisión de no reasentar a la población chagosiana en el Territorio Británico del Océano Índico por razones de viabilidad, defensa y seguridad, así como por el costo para los contribuyentes británicos. El Gobierno del Reino Unido ha examinado con detenimiento los aspectos prácticos del establecimiento de una pequeña comunidad apartada en las islas de baja altitud y los retos a los que se enfrentaría cualquier comunidad. Como alternativa, el Gobierno del Reino Unido tratará de contribuir a la mejora de los medios de subsistencia de la población chagosiana en las comunidades en que viven actualmente y destinará aproximadamente 40 millones de libras esterlinas durante los próximos diez años a alcanzar ese objetivo.

Notas

- ¹ There are 3 Crown Dependencies: Bailiwick of Guernsey; Bailiwick of Jersey; Isle of Man.
- ² http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/CoreDocuments.aspx
- ³ There are 14 British Overseas Territories but only 10 have permanent indigenous populations, namely: Anguilla; Bermuda; Cayman Islands; Falkland Islands; Gibraltar; Montserrat; the group Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno; the group St Helena, Ascension, Tristan da Cunha; Turks and Caicos Islands; Virgin Islands (commonly known as the British Virgin Islands).
- ⁴ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx
- ⁵ http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session13/GB/UKMidTermReport_Aug2014.doc
- ⁶ ICERD, ICCPR, ICESCR, CAT, CEDAW, CRC, CRPD.
- ⁷ OPCAT, ICCPR-OP2, CRC-OP-AC, CRC-OP-SC, CEDAW-OP, CRPD-OP.
- ⁸ UPR recommendations 110.4, 110.6–110.8, 110.11–110.13, 110.30, 110.31.
- ⁹ UPR recommendations 110.1, 110.5, 110.26.
- ¹⁰ UPR recommendation 110.48.
- ¹¹ UPR recommendations 110.14–110.19, 110.20–110.26, 110.28.
- ¹² UPR recommendation 110.3.
- ¹³ UPR recommendations 110.33, 110.67, 110.68.
- ¹⁴ 18 November 2016.
- ¹⁵ As at 26 January 2017.
- ¹⁶ UPR recommendations 110.29, 110.74.
- ¹⁷ UPR recommendations 110.32, 110.39, 110.44, 110.46, 110.49, 110.50, 110.53, 110.66, 110.102, 110.103, 110.116.
- ¹⁸ Pages 36–38 of CD2014.
- ¹⁹ UPR recommendation 110.61.
- ²⁰ UPR recommendation 110.92.

- ²¹ UPR recommendations 110.40, 110.51, 110.69–110.71.
 - ²² UPR recommendations 110.72–110.76, 110.99.
 - ²³ UPR recommendations 110.43, 110.59, 110.60, 110.90, 110.91.
 - ²⁴ UPR recommendations 110.58, 110.118–110.121.
 - ²⁵ UPR recommendation 110.83.
 - ²⁶ UPR recommendations 110.54–110.57.
 - ²⁷ UPR recommendation 110.122.
 - ²⁸ UPR recommendations 110.86–110.89, 110.94–110.96.
 - ²⁹ UPR recommendation 110.42, 110.101.
 - ³⁰ UPR recommendation 110.41.
 - ³¹ UPR recommendations 110.40, 110.52, 110.62–110.65.
 - ³² UPR recommendations 110.9, 110.10, 110.38, 110.78–110.80, 110.106.
 - ³³ UPR recommendation 110.102.
 - ³⁴ UPR recommendation 110.77.
 - ³⁵ UPR recommendation 110.129.
 - ³⁶ UPR recommendations 110.2, 110.45.
 - ³⁷ Respectively pages 115–147, and 40–115 of CD2014.
-